



DECIMOTERCER INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Informe Final

Acciones colectivas

Ponente:
Patricia Alvarenga



Nota: El contenido de esta ponencia es responsabilidad del autor. El texto y las cifras de las ponencias pueden diferir de lo publicado en el Decimotercer Informe sobre el Estado de la Nación en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores y consultas. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.

En esta ponencia analizamos las movilizaciones sociales contemporáneas a la luz de los procesos históricos. Interesa apreciar sus transformaciones desde mediados del siglo XX, con el surgimiento del estado de bienestar hasta el presente. Se considera que en América Latina puede establecerse un parteaguas entre las movilizaciones que preceden al auge neoliberal de los ochentas y aquellas que caracterizan la época contemporánea. Con este estudio pretendemos ofrecer un análisis comparativo que permita dilucidar las nuevas características de los movimientos sociales, aquellas que han perdurado, así como tendencias que se advertían en las antiguas movilizaciones sociales pero que hoy se manifiestan dotadas de nuevas significaciones. Estudiamos cómo se han transformado los actores sociales en su interacción así como en su relación con el Estado. Interesa dilucidar las estrategias de protesta y de negociación ensayadas en un horizonte político cuyas lógicas se han visto fuertemente trastocadas.

Nos fundamentamos en la bibliografía existente sobre las organizaciones y movilizaciones sociales para nuestro país y, para el análisis del período posterior a la gran movilización denominada “Combo” ante la escasez de estudios, nos apoyamos básicamente en los existentes, es decir, aquellos realizados por el programa *Estado de la Nación*. Este se ha ocupado de recopilar la información periodística sobre el tema ofreciendo anualmente una caracterización de las acciones colectivas. Las Ponencias del *Estado de la Nación*, ricas en información que permiten construir el contexto general en que se desarrolla la protesta, presentan limitaciones para ingresar en el universo interior de los actores sociales. El presente ensayo se propone, además de ofrecer conclusiones generales sobre la dinámica de la protesta, construir posibles vías de interpretación de las formas de interacción social generadas por la pluralidad de grupos que manifiestan su descontento, las cuales, debido a las limitaciones del conocimiento con que al respecto contamos, estarían todavía por corroborarse.

Estado y movimientos sociales

Importantes transformaciones han ocurrido en la relación entre los entes estatales y la ciudadanía. Hasta inicios de la década de los ochentas, en alguna medida la mayor parte de las movilizaciones sociales, iban en la misma dirección de los proyectos del estado de bienestar.¹ Su propósito consistía en acelerar y profundizar las transformaciones sociales que los representantes del Estado asumían como propias, aun cuando no siempre la retórica se correspondía con la práctica política. El partido político que tuvo una mayor incidencia en la sociedad costarricense entre las décadas de 1950 y 1980, el Partido Liberación Nacional, promovió, junto con el ascenso social extensos programas de bienestar encaminados a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

La consolidación de la clase media para entonces estuvo relacionada con el impulso que los agentes del Estado dieron a la educación en sus diferentes niveles. Se multiplicaron escuelas y colegios en el territorio nacional y se crearon cuatro universidades públicas que han tenido un papel central en la formación de los

¹ Puede consultarse: Iván Molina y Steven Palmer, *Historia de Costa Rica. Breve, actualizada y con ilustraciones*, San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997, cap. 9.

profesionales requeridos para impulsar la modernización del país. Al Consejo Nacional de Producción (CNP), creado en 1965, se le asignó la doble función de proteger a los productores agrícolas para el mercado interno, comprando sus cosechas a precios que les garantizaran un margen mínimo de ganancias para venderlas a los consumidores a precios subsidiados. En esta forma, a través del CNP el estado benefactor incidía en la capacidad adquisitiva de los salarios y protegía a diversos productores agrícolas, desde los grandes arroceros hasta los pobres “maiceros”, de las contingencias de los vaivenes de los precios.² Sin embargo, este proceso de crecimiento no estuvo exento de contradicciones. En Costa Rica, así como en el resto de Centroamérica, la expansión agropecuaria fundamentada en el azúcar y la carne, propició la deforestación y la concentración de la tierra en pocas manos, especialmente en la región del Pacífico y del Caribe, incrementándose el precarismo y la marginalización del pequeño productor.³

En 1961 el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), institución destinada a ofrecer soluciones al problema agrario.⁴ En un contexto de rápida concentración de la tierra, el ITCO se convirtió en una especie de “apaga incendios” que distó mucho de satisfacer las necesidades del campesinado y, a sus beneficiarios les ofreció soluciones muy limitadas en lo que respecta al acceso a recursos económicos para trabajar la tierra y a asesoría técnica.⁵ El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) fundado en 1954, estuvo destinado a resolver el problema de vivienda de los sectores urbanos de escasos recursos. Si bien este no logró evitar la expansión de las barriadas marginales, tuvo un papel vital en la construcción de barrios de trabajadores dotados de viviendas con servicios mínimos.

En general, la expansión de los derechos laborales y sociales así como el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia, constituía un objetivo central de las organizaciones sindicales y vecinales que reafirmaba las políticas redistributivas promovidas desde el Estado.⁶ En ese sentido, movilizaciones dirigidas por grupos de izquierda, con relativa flexibilidad, podían ser cooptadas por el Estado. Ese proceso de cooptación se convierte en una de las estrategias utilizadas por los agentes estatales para evitar que el malestar se manifieste en protesta social.⁷

² Véase: Hernán Alvarado, Manuel Argüello, Carlos Cruz, José Díaz y Enrique Gutiérrez, *De los empresarios políticos a los políticos empresarios. Taller de coyuntura*, Heredia: Oficina de Publicaciones de la Universidad Nacional, 1981, cap.1.

³ Alfredo Guerra Borges “El desarrollo económico” en Héctor Pérez editor, *Historia General de Centroamérica*, Vol. 5, San José: FLACSO, 1994, pp. 57-67. Iván Molina y Steven Palmer, *op. cit.*, 1997, p.90.

⁴ Francisco Barahona Riera *Reforma agraria y poder político. El caso de Costa Rica* San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1980, .

⁵ Puede consultarse al respecto: Isabel Román *¿Conciliación o conflicto? Luchas campesinas y democracia en Costa Rica*, San José: Editorial Porvenir, 1994, p.40,

⁶ Sergio Reuben describe el concepto de *bienestar social* “como un conjunto de condiciones y derechos que la sociedad le asegura al ciudadano, que le permiten disfrutar de una certidumbre de supervivencia en un futuro razonablemente lejano...” “La sociedad civil, el bienestar social y las transformaciones del Estado en Costa Rica” en *Reflexiones*, N° 83, 2004, p. 23.

⁷ Isabel Román plantea este punto cuando analiza los movimientos campesinos de los ochentas. Sostiene que para entonces el país asiste al deterioro de un acuerdo básico entre los agentes del Estado y los actores sociales. Sin embargo, la cooptación sigue siendo estrategia política privilegiada por los agentes del Estado. En los ochentas la

En los ochentas y noventas, el ideal del desarrollo ha sido sustituido por el de la competitividad de la libre empresa en una economía crecientemente globalizada. Entonces demandas tales como mejores salarios, acceso a la tierra, a una vivienda digna, encuentran dificultades para ser vinculadas a la agenda de los políticos. Aún así, el Estado costarricense a través del asistencialismo continúa “apagando incendios”, es decir, tratando de resolver los problemas sociales más urgentes y ofreciendo alguna respuesta a conflictos sociales que constituyen una amenaza a su legitimidad.

En 1983 una movilización ciudadana nacional obligó al gobierno de Luis Alberto Monge a reconsiderar la decisión de volcar sobre los hombros de los consumidores el pago a los acreedores externos del ICE en un contexto de violenta devaluación de la moneda nacional y de incremento desproporcionado de los intereses por parte del capital financiero internacional. Los movimientos por la vivienda se caracterizan a partir de los sesentas por su combatividad pues recurrentemente desafiaron el orden a través de la invasión de terrenos privados o públicos. Esta experiencia de movilización popular en la que participaron activamente organizaciones de izquierda, tiene su punto culminante en la década de los ochentas cuando, según Jorge Vargas, se convirtieron en la principal reivindicación en zonas urbanas y en poblaciones vecinas a los puertos del país. Entre sus más combativas organizaciones se encuentran el Frente Democrático de Vivienda (FDV), el Frente Costarricense de Vivienda (FCV), el Comité Patriótico Nacional (COPAN), y la Asociación Nacional de Vivienda (ANAVI). Mediante invasiones masivas de terrenos crean nuevos asentamientos en precario que concentran una proporción significativa de la población urbana.⁸ Sin embargo, pese a que el problema de la vivienda se agudiza en el país, el Estado a través de mecanismos clientelares que favorecen a los pobladores que rechazan la organización independiente, ha logrado ir desplazando o cooptando al liderazgo.⁹

Las grandes movilizaciones contemporáneas: el Combo del ICE y el movimiento contra el TLC expresan una nueva relación entre los agentes del Estado y la sociedad civil. Nos encontramos con movilizaciones que contradicen los cimientos mismos de las propuestas de sociedad que emanan de los agentes estatales. Por esta razón, contradictoriamente, pese a que la polarización ideológica característica de la Guerra Fría quedó atrás, en el contexto actual los representantes del capital se sienten impulsados a establecer una alianza estrecha con el gobierno con el fin de enfrentar abiertamente a la rebeldía ciudadana cuando esta amenaza con interferir en las transformaciones demandadas por el imperante neo-liberalismo.¹⁰ Es decir, mientras

Federación Sindical Agraria Nacional (FESIAN) es un claro ejemplo de esa alianza clientelar en la que a través de relaciones informales entre los políticos y los líderes se obtienen dádivas tales como el apoyo requerido para adquirir legalmente a través del IDA las fincas que han sido invadidas por los campesinos Isabel Román, op.cit., pp. 104-111, Francisco Barahona, op.cit., p. 259.

⁸ Jorge Vargas C “Los movimientos urbanos en Costa Rica durante los ochenta” en Juan Manuel Villasuso editor, *El nuevo rostro de Costa Rica*, Heredia: CEDAL, 1992, pp. 173-180.

⁹ José Manuel Valverde, María Eugenia Trejos, Minor Mora *Integración o disolución socio-cultural. El nuevo rostro de la política social* San José: Editorial Porvenir, 1993, capítulos VI y VII.

¹⁰ Según el Informe del Estado de la Nación del 2000, las siguientes organizaciones se manifestaron a favor del Combo: Promotora de Comercio Exterior, Cámara de Industrias y de Comercio, Cámara de Comerciantes Costarricense-Norteamericana, la Cámara de Productos de Software, la Cámara Nacional de Radio.

en el período que denominamos estado de bienestar nos encontramos con un movimiento social encaminado a acelerar el discurso reformista, en la actualidad, la tendencia es que los más significativos movimientos sociales contemporáneos se propongan revertir las propuestas estatales a favor de la profundización del neoliberalismo y del “libre mercado” en los términos impuestos por las grandes potencias.

Protagonistas en los movimientos sociales

a. Los sindicatos

La organización protagónica más visibilizada en la opinión pública y en los estudios sobre movilizaciones sociales en el período analizado es el sindicato. En este sentido encontramos un elemento clave de continuidad entre las movilizaciones sociales de la segunda mitad del siglo XX y las contemporáneas. El desarrollo de la participación política costarricense, a partir de la reestructuración estatal que siguió al 48, se vio limitado por una persistente estrategia de reprimir el sindicalismo de izquierda¹¹, promover el sindicalismo “democrático” y, en los ochentas, el solidarismo, caracterizado por la búsqueda de soluciones a los problemas más urgentes de los trabajadores renunciando a la movilización social.¹² Con la visible excepción de las zonas bananeras, tradicionalmente la organización sindical de trabajadores agrícolas ha sido marginal. Por consiguiente, los trabajadores de las empresas privadas del sector secundario y terciario, desde la reorganización del orden social costarricense que deviene como consecuencia del resultado de la guerra civil del 48, han tenido una participación limitada en las movilizaciones sociales. En estos, el solidarismo ha encontrado un fértil terreno para desarrollarse con apoyo de la clase empresarial.

Sin embargo, en el contexto de una política estatal de fortalecimiento de las capas medias, los agentes del Estado, aunque contribuyeron a limitar el desarrollo del sindicalismo en el sector privado, no se opusieron a este en el sector público.¹³ Los gobernantes de las últimas décadas ya no están anuentes a favorecer el sindicalismo en el seno de las instituciones públicas. No obstante, los sindicatos públicos conservan su hegemonía en el movimiento social costarricense. Desde mediados del siglo XX hasta hoy constituyen actores importantes en movilizaciones trascendentes por la pluralidad de sus participantes, su alcance en el territorio nacional y su capacidad de retar al Estado.

¹¹ Según Daniel Camacho el carácter desmovilizador del Estado “triunfa en su objetivo principal: impedir las luchas reivindicativas en el campo de las relaciones obrero-patronales.” “Costa Rica. Virtudes y vicios de una democracia perfecta”, en Régine Steichen compiladora, *Democracia y democratización en Centroamérica*, San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1993, p.226

¹² Carlos Abarca, “Luchas populares y organización obrera en Costa Rica (1950-1960)”, *Revista de Ciencias Sociales*, marzo-oct. 1978, Marielos Aguilar, *Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica. 1943-1971*, San José, Editorial Porvenir, 1989.

¹³ Oscar Cuellar y Santiago Quevedo, “Condiciones del desarrollo sindical en Costa Rica”, *Revista de Ciencias Sociales*, marzo-oct. 1978. Manuel Rojas, “Un sindicalismo del sector público”, en Juan Manuel Villasuso editor, *op. cit.*, 1992.

Cuadro 1
Movimientos sociales multisectoriales que cuentan con participación sindical

Año	participantes	motivo de la movilización social	Alcance geográfico
1952 y 1956	El Partido Vanguardia Popular en clandestinidad, sindicatos y juntas progresistas de San José	Contra alza de tarifas eléctricas. A favor de la nacionalización de las líneas de distribución eléctricas A favor del fortalecimiento del ICE	San José
1983	Organizaciones comunales y sindicatos	Contra alza de tarifas eléctricas	Todo el país
1995	Organizaciones magisteriales, otros sindicatos públicos, universidades públicas	Contra ley de pensiones, contra pacto político Figueres –Calderón	Todo el país
2000	sindicatos, agricultores, organizaciones comunales, organizaciones eclesiales, ecologistas, feministas, estudiantes universitarios y colegiales	En defensa del ICE contra la ley que conduce a su privatización	Todo el país
2004	agricultores, taxistas, dueños de talleres, comunidades, trabajadores del sector público, estudiantes de secundaria y universitarios	Contra el monopolio de la revisión técnica vehicular concedido a RITEVE.	Todo el país
2005-2007	Sindicatos públicos, ecologistas, agricultores, organizaciones indígenas, universidades públicas, organizaciones comunales, agrarias y transportistas	Lucha en contra del TLC	Nacional

Fuentes: Ponencias Estado de la Nación, 2000-2006, Patricia Alvarenga *De vecinos a ciudadanos* San José-Heredia: EUNA- EUCR, 2005.

De acuerdo con las ponencias sobre Acciones Colectivas del Estado de la Nación del 2000 al 2006, los sindicatos son actores centrales en las movilizaciones sociales. En aquellas correspondientes al período 2000 – 2003, de acuerdo a los periódicos del país, el 43,6% de los participantes fueron trabajadores, seguidos por los

vecinos, a los cuales corresponde el 12,9%.¹⁴ En 2006, según Esteban Sánchez, los trabajadores permanecen como los principales actores protagonizando el 48.1% de las acciones colectivas reportadas.¹⁵

En las últimas décadas la imagen del sindicalismo en América Latina y, en particular, en Costa Rica ha sufrido un fuerte deterioro debido a distintos factores. En 1984 durante la última huelga de trabajadores bananeros en la Zona Sur la Compañía Bananera alegó que, debido a su incapacidad para hacer frente a las demandas sindicales, se retiraba de la región. La gran empresa se fue del país dejando la zona en franca desolación y sectores hegemónicos de la opinión pública, culpabilizaron al sindicato de la miseria y marginalidad que se impuso en la Zona Sur durante décadas. En América Latina los sindicatos que han pactado con los gobiernos, con frecuencia se han visto envueltos en casos escandalosos de corrupción. En Costa Rica, la corrupción de particulares líderes sindicales es utilizada para desprestigiar al sindicalismo en su conjunto.

El sindicalismo ha sido objeto de constantes críticas en la prensa en las que se asocian las luchas sindicales con la defensa de privilegios. De acuerdo a Manuel Rojas, “la ausencia de organizaciones sindicales en el sector privado, opera como una especie de peso muerto para el sindicalismo en el sector público, porque sus demandas no son equilibradas con las demandas de otro sector con condiciones de salario y trabajo diferentes.”¹⁶ Esta distorsión en buena medida ha posibilitado a quienes controlan la opinión pública presentar los beneficios obtenidos entre los trabajadores cuyo patrono es el Estado, como “privilegios” apropiados por un grupúsculo que deben de ser pagados por el conjunto de los contribuyentes.

Pese a esta fuerte lucha por hacer valer su legitimidad, el sindicalismo de los trabajadores del Estado sigue constituyendo, como lo señalamos anteriormente, el sector laboral más dinámico. Fue protagónico en la gran movilización magisterial de 1995 y continúa siéndolo en las movilizaciones nacionales de la presente década, tales como las luchas en oposición al Combo y al monopolio de la revisión técnica vehicular y al TLC.

La vasta experiencia de la movilización de los sindicatos públicos de las décadas precedentes les ha permitido constituirse en hegemónico en las movilizaciones sociales. Constituyen los actores más persistentes y con más protagonismo en luchas que convocan a una pluralidad de organizaciones. En relación con la movilización en contra del monopolio de la revisión técnica vehicular, la iniciativa provino de nuevos actores organizados, aunque también la participación de los sindicatos públicos ofreció una importante contribución al movimiento, sumándose a una nueva experiencia en la construcción de alianzas sociales. En el 2005, en el contexto de la lucha contra el TLC

¹⁴ Sindy Mora Solano “Acciones colectivas en Costa Rica. 2000-2003” en Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

¹⁵ “Las acciones colectivas en Costa Rica en el año 2006”.

¹⁶ Manuel Rojas “un sindicalismo del sector público” en Juan Manuel Villasuso editor *El nuevo rostro de Costa Rica* San José: CEDAL, 1992, p. 184.

los sindicatos del sector público en alianza con diversos sectores y organizaciones para constituir la movilización social de mayor duración y alcance del nuevo milenio.¹⁷

b. Las organizaciones comunales

En la historia contemporánea de Costa Rica las organizaciones comunitarias han constituido uno de los ejes dinamizadores del movimiento social. Hasta los ochentas las organizaciones sociales protagónicas en las movilizaciones de la época: las comunales y sindicales, tuvieron una importante influencia de la izquierda. Aun las pequeñas movilizaciones comunales con frecuencia contaron con líderes militantes. Entre las décadas de 1950 y 1970 asistimos al período de auge del movimiento comunitario gracias a la expansión a través de todo el país de las juntas progresistas. Este auge está íntimamente vinculado con el activismo de izquierda, en particular del Partido Vanguardia Popular (PVP) que cooptó a líderes locales y dotó de un liderazgo de base a las comunidades. El Estado intentó redireccionar el movimiento comunal de acuerdo a intereses y proyectos políticos de los detentadores del poder. La creación de las Juntas de Desarrollo constituyó una respuesta a las Juntas Progresistas, organizaciones comunales que encontraban en la movilización social uno de los más importantes instrumentos de negociación. Las Juntas de Desarrollo resultaron atractivas para las comunidades pues contaban con significativos recursos económicos. Sin embargo, estas no se convirtieron en obedientes instrumentos del Estado pues durante los setentas protagonizaron movilizaciones comunales y en la gran movilización nacional de 1983 en contra de los aumentos de tarifas eléctricas, la Junta Progresista de Hatillo, contando con el liderazgo de la izquierda, se convirtió en protagonista.

Las organizaciones comunales constituyen actores menos visibles y menos protagónicos en las grandes movilizaciones de esta época. Sin embargo, las movilizaciones de vecinos persistentemente ocupan un lugar importante en el número de movilizaciones registradas. En el pasado las organizaciones vecinales dieron lugar a la conformación de movilizaciones ciudadanas regionales e incluso nacionales que conmocionaron al país. Tal es el caso de la movilización ocurrida en Cartago en 1962, liderada por la clase media y el capital cartaginés, sectores totalmente opuestos a las organizaciones de izquierda, predominantes para entonces en el país. Esta movilización se extendió por un par de años y constituyó la única de las movilizaciones analizadas que cuenta con cruentos episodios (el 23 de noviembre de 1962 la guardia abrió fuego contra una movilización matando a tres personas y dejando docenas de heridos) La “huelga de tarifas” se orientó en contra de la expansión del ICE, empresa responsabilizada por los participantes de los desequilibrios en el proceso de crecimiento económico por cuanto sus políticas favorecían las regiones del occidente del Valle Central. Como resultado de la movilización Cartago logró la creación de la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) la cual aun en la actualidad se ocupa de brindar el servicio eléctrico en la provincia. En 1983 cuando el gobierno de turno decretó un exorbitante incremento en los precios de la electricidad en el contexto de crisis económica que deterioró considerablemente las condiciones de

¹⁷ Ricardo Segura Ballar “Costa Rica. Luchas contra las políticas de privatización y el Tratado de Libre Comercio Centroamérica- EE.UU” en *Revista de Ciencias Sociales* N° 106, 2004 (IV), p. 34

vida de la ciudadanía, tuvo lugar una movilización nacional que contó con el protagonismo de organizaciones vecinales así como con la activa participación de los sindicatos del sector público.

No obstante, después de la gran explosión social de 1983 las organizaciones locales perdieron la capacidad que otrora tuvieran de hegemonizar movilizaciones que superan el espacio de la localidad. En alguna medida ello se explica por la crisis de la izquierda, la cual tuvo lugar poco tiempo después del gran triunfo de la movilización del 83 y, por otra parte, por la capacidad del Estado de cooptar las organizaciones comunales a través de las juntas progresistas. Este tránsito no fue de ninguna manera lineal y estuvo acompañado de un extenso período de lucha entre la izquierda y los representantes de los partidos oficiales en las juntas progresistas, luchas que tienen su momento culminante en la movilización de 1983 cuando los dirigentes de izquierda de la Junta Progresista de Hatillo asumen su liderazgo. Sin embargo, es indudable que el Estado, logró imponerse sobre el movimiento comunal no solo a través de las juntas sino también mediante su política clientelista, siempre anuente a ofrecer dádivas a las comunidades que les apoyaron durante los procesos electorales.

Las organizaciones comunales se han movilizado históricamente impulsadas por muy diversas causas. En el siglo XX, además de las luchas por vivienda, han sido los problemas relacionados con el suministro y el precio del agua y la electricidad, así como el costo y la calidad del transporte público los principales detonantes de las movilizaciones locales. Por décadas ha preocupado a la ciudadanía contar con capacidad de incidencia en las políticas estatales que atañen a los servicios públicos. La expansión del Estado entre 1950 y 1980 les hizo sentir la necesidad de medir fuerzas con las autoridades públicas a través en buena medida de las movilizaciones sociales con el fin de limitar su capacidad de llevar adelante políticas, particularmente de precios, consideradas perjudiciales para sus bolsillos.¹⁸ Esta preocupación sigue estando presente en las movilizaciones vecinales. En 2002 vecinos se manifiestan contra su exclusión por las políticas estatales, relacionados con la calidad de los servicios públicos.¹⁹ En 2005 las movilizaciones de vecinos ocupan el segundo lugar. De nuevo sus manifestaciones giran en torno al costo de los servicios.²⁰

Además, entre 2000 y 2006, dado el deterioro de la infraestructura vial del país, el tema del mal estado de carreteras y caminos vecinales se convierte en elemento dinamizador de movilizaciones comunales.²¹ Del 2000 al 2005 13,7% de las demandas giran en torno a la calidad y costo de servicios²² y en 2006 los vecinos llevan adelante el 18.3% de las protestas registradas en periódicos. Entre los rubros de servicios más significativos se encuentran las demandas por arreglos de puentes, caminos y carreteras

¹⁸ Alvarenga, capítulo 3, op.cit.

¹⁹ Hannia Franceschi Barraza “Acciones colectivas de la sociedad civil. Hacia el fortalecimiento de la democracia en Costa Rica. 2002” Programa Estado de la Nación.

²⁰ Sindy Mora Solano “Acciones colectivas de la sociedad costarricense. 2000-2005” Ponencia Estado de la Nación.

²¹ Esteban Sánchez, op.cit.

²² Sindy Mora, op.cit., 2005.

La política de privatizaciones que caracteriza la agenda neoliberal en el mundo occidental, para el caso de Costa Rica, se ha llevado a cabo solo parcialmente debido a la oposición ciudadana, principalmente manifiesta cuando se trata de empresas que han mostrado ser eficientes y rentables. En estos veinte años de experiencia neoliberal, han surgido nuevas contradicciones entre el Estado y la ciudadanía. El destino del capital público acumulado en las empresas estatales, se convierte en uno de los nuevos focos de disputa. Si bien en décadas anteriores algunas de las rebeliones comunales y regionales se dirigieron contra la expansión de las empresas de servicios en manos del gobierno central, la ciudadanía ha aceptado el discurso del estado benefactor, que presentaba el capital público como patrimonio de todos los costarricenses. En cambio, actualmente, no han dado los frutos esperados los esfuerzos de los funcionarios públicos para convencer a los ciudadanos de los beneficios de la privatización de empresas o negocios en manos del Estado.²³

Aun cuando movimientos comunales independientes se han multiplicado en los últimos años, también han surgido movimientos comunales dependientes del Estado. El “Triángulo de Solidaridad” fue promovido por los dos últimos gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana para resolver problemas, especialmente, vinculados con la infraestructura de las comunidades más pobres, involucrando a tres actores: la comunidad, las municipalidades y las instituciones del gobierno. Pese al reconocimiento explícito de la comunidad como protagonista, con frecuencia en la práctica esta se limitó a responder a las ofertas de recursos existentes, reproduciéndose así las típicas relaciones patriarcales entre el Estado y las comunidades pobres.²⁴ Según el Informe del Estado de la Nación del año 2000, en el Triángulo de la Solidaridad la participación ciudadana solamente fue utilizada para dar respuestas concretas, en particular a problemas agudos de comunidades generalmente muy pobres.²⁵ Además, ha tenido dificultades para incorporar, como se lo propuso, a las municipalidades. En 2001 *La Nación* recogía las declaraciones del presidente de la Unión de Gobiernos Locales quien manifestaba, en relación con el Triángulo de Solidaridad que “muchas veces nos ha dado la impresión de que la población y el poder local, solo están ahí como invitados especiales y que no tienen verdadero poder de decisión”.²⁶

²³ Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, el 72% de la población entrevistada manifestó estar de acuerdo con la lucha en contra del denominado Combo del ICE. “Costarricenses frente a los movimientos sociales” IDESPO, UNA, Heredia, 2003, p. 38

²⁴ El líder comunal Arnoldo Piedra, a quien hemos referido en capítulos anteriores, últimamente ha estado participando en su comunidad con el Triángulo de Solidaridad. Él se siente molesto por los requerimientos: participación en cursos, seminarios, elaboración de extensos informes mientras que, en la práctica, la comunidad tiene un papel pasivo frente a los otros dos actores: el gobierno y la municipalidad. Ver sobre este tema: Luis Alberto Alfaro, “El triángulo de solidaridad en Acosta. Un vistazo desde abajo”, *Aportes*, N°120, abril 1999, pp. 24-27; Ana Cristina Camacho, “Pros y contras del Triángulo de Solidaridad”, *Idem.*, pp. 34-

²⁵ Varios autores *Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible* San José: Proyecto Estado de la Nación, 2000, pp. 223-224.

²⁶ *La Nación* también refiere en esta noticia a la complacencia del alcalde de Guácimo por los enormes recursos que brindara el Triángulo para la construcción de cerca de 35 obras. “Triángulo ante nuevos desafíos”, *La Nación*, 14 de enero del 2001, p.20 A.

En síntesis, organizaciones sindicales y vecinales continúan ocupando un lugar preeminente en el número de acciones colectivas registradas a partir del 2000. No obstante, los movimientos comunitarios compuestos por grupos heterogéneos de ciudadanos han perdido el dinamismo que los caracterizara en décadas anteriores, cuando constituyeron ejes sobre los que se desarrollaron movilizaciones regionales y nacionales. En cambio, el sindicalismo del sector público continúa desempeñando un papel preponderante en el movimiento social, lo que se aprecia no solo en el número de movilizaciones en las que participan sino especialmente, como se analiza más adelante, en su papel estratégico en acciones colectivas de envergadura nacional.

Características de las movilizaciones comunales durante el Estado de bienestar y en la actualidad

<p>Décadas de los cincuenta a los ochentas</p>	<p>Movilizaciones vecinales pero también se constituyen en ejes movilizados de amplios grupos de ciudadanos a nivel regional y nacional</p>	<p>Período contemporáneo</p>	<p>Movilizaciones vecinales que ya no cuentan con la capacidad de generar acciones colectivas allende el vecindario.</p> <p>Establecen alianzas con organizaciones multisectoriales.</p>
	<p>Reivindicaciones: precio y calidad de servicios públicos.</p> <p>Vivienda.</p>		<p>Reivindicaciones: servicios públicos, especialmente infraestructura</p> <p>Medio ambiente.</p>

c. Estudiantes universitarios

La impresionante movilización de estudiantes, especialmente universitarios en la lucha contra el Combo, precisamente, tuvo lugar al cumplirse los 30 años del movimiento estudiantil que marcó la época de mayor actividad política del estudiantado de la Universidad de Costa Rica: el movimiento contra ALCOA, empresa transnacional a la que el estado costarricense le concedió el derecho de explotación de bauxita. Al igual que en el caso del “Combo ICE”, en la movilización de 1970 la Asamblea Legislativa respondió a las protestas aprobando apresuradamente el cuestionado proyecto. En la movilización social de 2000 la centralidad de esta institución como escenario de lucha, la importancia de la participación estudiantil y la rebeldía cívica que, por semanas, puso en jaque al Estado, condujo a miembros de la comunidad universitaria a comparar recurrentemente la lucha contra el denominado Combo con aquella que tuvo lugar treinta años atrás contra Alcoa.²⁷

Prevaleció, entonces, la sensación de que un cambio sustantivo ocurría en la identidad de la juventud integrante de las universidades públicas. Esta de repente parecía superar la superficialidad, el consumismo, el desinterés por los problemas nacionales que la generación de ALCOA le ha atribuido, para crear una nueva cultura

²⁷ “El combo revive espíritu de Alcoa”, *Universidad.*, 22-28 de marzo del 2000, p.3.

política comparable a la que surgió en la década del setenta y que se prolongó en la del ochenta, cuando el casco central de la UCR y de la UNA se convirtieron en espejo viviente (mediante la circulación de libros, afiches, colecciones de fotos, discursos políticos improvisados) de la vida política del país y del resto de América Latina. En este contexto, Eva Carazo afirmó que “de ahora en adelante habrá un compromiso serio con el país”.²⁸ Reafirmaba sus palabras el semanario *Universidad* cuando anunciaba que con esta movilización surgían “fuerzas emergentes” llamadas a canalizar el descontento social.²⁹ Las universidades públicas, que en la movilización de 1995 contra el recorte de las pensiones habían ingresado decididamente a la esfera pública, tienen una participación significativa en lo que llevamos de la década del dos mil. La experiencia del Combo concentrada especialmente en las últimas semanas de marzo de 2000, se potenciará en las luchas contra la aprobación del TLC. Éstas, han politizado significativamente la vida estudiantil en los últimos años generando, al igual que durante el denominado Combo pero por un período mucho más extenso, investigaciones académicas, foros, mesas redondas y toda una serie de actividades, convirtiendo estas luchas reivindicativas en parte de la vivencia universitaria cotidiana.

Entre la multiplicidad de grupos étnicos y de organizaciones sociales que participaron en la movilización contra el TLC del 26 de febrero de 2007, los estudiantes de las universidades públicas tuvieron una sobresaliente participación. En esta lucha contemporánea los integrantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) asumen un papel protagónico contradiciendo las expectativas que se tienen acerca de instituciones orientadas a la tecnología en las que las ciencias sociales ocupan espacios marginales. Es decir, la decidida participación del ITCR contradice el sentido común prevaleciente según el cual se esperaba que sus campos de estudio la inclinarían a favor de los proyectos de apertura económica acordes con el neoliberalismo. La activa participación estudiantil en los dos ciclos de protesta más importantes que se han registrado en el país a partir de 2000, politiza nuevamente la vida universitaria, coloca a las instituciones públicas de educación superior en el centro del debate nacional ampliando sus espacios de participación en la dinámica política del país.

d. Los movimientos agrarios

En la segunda mitad del siglo XX los movimientos agrarios reivindican fundamentalmente el acceso a la tierra en un contexto en el que la frontera agrícola se había agotado. Las demandas reivindicativas consisten en solicitar al gobierno la entrega de tierras y, cuando este no responde positivamente a las demandas, la estrategia de lucha utilizada con mayor frecuencia consiste en la invasión de fincas. Como lo vimos páginas atrás, la creación en 1961 del Instituto de Tierras y Colonizaciones (ITCO) dotó a los funcionarios del Estado de una válvula de escape, ofreciendo soluciones, aunque bastante limitadas, a las reivindicaciones sociales del agro. Las organizaciones campesinas estuvieron compuestas de trabajadores asalariados y establecieron recurrentemente vínculos con organizaciones y partidos de

²⁸ “¡Despertó la juventud! *Op. cit.*”

²⁹ “La desobediencia civil gana fuerza”, *Idem.*, 29-4 de abril del 2000, p.4.

izquierda. En la actualidad persiste este tipo de movilizaciones campesinas. En el 2004 la organización Campesinos de la Finca Bambuzal se enfrentaron a la Standard Fruit Company demandando tierras ubicadas en dicha propiedad. Éstos se proponen evidenciar su lucha en el predominante mundo ciudadano ideando como estrategia la ocupación de la Catedral Metropolitana, en la cual se concentraron desde el 25 de abril al 5 de agosto del 2004.³⁰

No obstante, desde la década de 1980 han tomado especial protagonismo las organizaciones de agricultores compuestas por medianos y pequeños propietarios. Los productores para el mercado interno se han visto particularmente afectados ante los proyectos de apertura de mercados, tales como el Tratado de Libre Comercio con México. Estos, incapacitados para competir con la masiva importación de productos agrícolas a bajos precios, parecieran destinados a desaparecer. Pioneros en las movilizaciones frente a la liberalización comercial, son defensores de la propiedad privada y comparten los valores políticos, sociales y religiosos tradicionales de la nación.

El Estado ha ofrecido como respuesta a su desventajosa situación la llamada reconversión productiva que consiste en hacerlos sustituir sus tradicionales cultivos para el abastecimiento del mercado interno por productos no tradicionales para el mercado externo. Sin embargo, esta propuesta dista mucho de satisfacer las demandas de los productores agrícolas. A través de acciones beligerantes como el bloqueo de vías públicas, los agricultores han mostrado su decisión de luchar por su sobrevivencia, demandando precios justos para sus productos, control de precios de los insumos requeridos para la agricultura y créditos con tasas de interés moderadas. De acuerdo a Marc Edelman, pese a que en décadas anteriores se realizaron esfuerzos por unificar las organizaciones de agricultores, tales como la creación en 1988 de la Unión Nacional del Sector Agropecuario, existen entre éstas diferencias que impiden la consolidación de un frente de lucha nacional. Por ejemplo la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL) concentra a productores del centro del país, pertenecientes a una clase media rural caracterizada por su anticomunismo, y la Unión de Pequeños Agricultores de la Región Atlántica (UPAGRA) integra a un buen grupo de productores de escasos recursos, que han tenido una tradición de lucha más confrontativa con el Estado y se han nutrido de organizaciones de izquierda, tales como exbananeros con experiencia sindical.³¹

UPANACIONAL no solo ha sobrevivido desde su fundación en 1981 hasta hoy, sino que se ha constituido en la organización del campo con mayor habilidad política para hacer frente al proceso de apertura comercial. Según Isabel Román esta organización despierta menos recelos en los agentes estatales por sus posiciones a favor de los valores tradicionales. También UPANACIONAL ha sabido aprovechar la experiencia y los vínculos políticos de antiguos dirigentes de cooperativas, pero, a la vez, ha logrado mantener una imagen de autonomía frente a los partidos tradicionales,

³⁰ Sindy Mora Solano “La protesta social en Costa Rica. Acciones colectivas en la sociedad costarricense en el año 2004” Ponencia Estado de la Nación.

³¹ Ver: Marc Edelman, cap. 2.

combinando medidas legales con medidas de presión tales como tomas de vías para hacerse oír por el gobierno de turno.³²

Hemos asistido a cambios significativos en las luchas agrarias. La presencia de los trabajadores agrícolas en los sindicatos de las zonas bananeras junto con las invasiones de fincas por parte de campesinos sin tierra, caracterizaron la dinámica social del agro en los años sesenta y setenta. Aun cuando gremios de productores agropecuarios como los arroceros y los ganaderos habían irrumpido en la arena política, es a partir de los ochentas cuando los productores del campo se convierten en protagonistas de acciones colectivas. Los pequeños y medianos productores hoy en día constituyen un sector con vasta experiencia en el campo de la negociación con el Estado, lo que les ha permitido obtener algunos éxitos parciales en su lucha contra la apertura comercial a través de las reglas del juego impuestas por el neoliberalismo así como ocupar un papel hegemónico en los movimientos más trascendentales de nuestros días.

d. Los nuevos movimientos sociales

En las décadas de los ochentas y noventas, hemos visto surgir y multiplicarse a las llamadas “nuevas organizaciones sociales” que descubren vetas contestatarias prácticamente inexistentes en los setentas. Sus propuestas no pretenden conducir hacia transformaciones globales sino más bien responden a agrupaciones políticas con demandas específicas las cuales no son necesariamente contradictorias. Ello ha hecho factible la construcción de alianzas políticas entre organizaciones sociales plurales³³ tales como ecologistas, feministas y de productores agropecuarios. Así mismo organizaciones vinculadas a sectores terciarios que no habían tenido visibilidad en el pasado, en la década del dos mil adquieren protagonismo. Taxistas y transportistas sorprenden por su capacidad de establecer alianzas con diversas organizaciones.

En los ochentas surgen organizaciones independientes de mujeres que toman como eje de su movilización la perspectiva de género, es decir, el reconocimiento de la existencia de la subordinación femenina mediante la creación de procesos históricos de dominación patriarcal. En el contexto del auge que en estas décadas toma el movimiento feminista a nivel mundial, las mujeres se organizan en aras de presentar sus propias demandas. A partir de 1985, se multiplican grupos, colectivos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) y programas de género. Gracias a la movilización de las mujeres, a la ayuda internacional y al apoyo gubernamental a algunas de las propuestas en beneficio de la mujer, en los últimos años han cristalizado nuevas instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer, así como un marco legal que sustenta importantes, aunque aún insuficientes, políticas para propiciar una mayor

³² Isabel Román, *¿Conciliación o conflicto? Luchas campesinas y democracia en Costa Rica*, San José: Editorial Porvenir, 1994, pp.112-117.

³³ Chantal Mouffe, “Por una política de la identidad nómada”, *Ciudadanía y feminismo*, diciembre 2001, pp. 261-284.

equidad en las relaciones de género³⁴ y en el 2007, gracias al trabajo político de las organizaciones de género, se logró la aprobación definitiva de la Ley en contra de la Violencia Doméstica después de haber sido aprobada por la Asamblea y rechazada por la Sala Cuarta en varias ocasiones consecutivas. La revisión de periódicos a partir de 2000 no evidencia una participación feminista protagónica en las movilizaciones sociales. Entre 2000 y 2003 las movilizaciones por la defensa y ampliación de derechos de grupos sociales tales como mujeres, indígenas, afrocostarricenses, inmigrantes, minorías sexuales, niños, discapacitados, etc.: apenas ascienden a un 1.6%.³⁵ Sin embargo, como en el caso de las organizaciones feministas, estas han logrado flexibilizar espacios institucionales para la negociación. Por ejemplo, los discapacitados cuentan con un partido político que gana en las elecciones del 2006 una curul en la Asamblea Legislativa, impulsando leyes a su favor. El movimiento gay que se desarrolla a partir de los ochentas, impulsado, en buena medida, por la fuerte corriente homofóbica que se desata con la epidemia del SIDA, ha logrado, al menos, construir espacios de reflexión y de lucha en defensa de las identidades que escapan a la sexualidad heteronormada así como moderar la represión y el violento discurso público en su contra, característico de la segunda mitad del siglo XX.³⁶

Desde los años setentas el movimiento ecologista se propone convertirse en una alternativa política para detener el creciente deterioro de los recursos naturales.³⁷ Al igual que las organizaciones feministas, las ecológicas se desarrollan gracias al auge del movimiento ecologista a nivel mundial, a la cooperación económica internacional y, en los últimos años, al descubrimiento de una nueva y lucrativa empresa: el turismo ecológico. Los esfuerzos de estas organizaciones por detener el deterioro de los recursos ha cristalizado en la creación del Ministerio de Ambiente y Energía. Sin embargo, importantes iniciativas de protección del medio ambiente han provenido de organizaciones comunales e intercomunales. Tal es el caso de los vecinos de Escazú, Alajuelita, Santa Ana, Mora, Aserrí y Acosta que constituyeron el Comité Intercantonal para la Defensa de los Cerros del Suroeste de San José.³⁸ En un estudio sobre conflictos ambientales por la explotación minera en la Cordillera Volcánica Central en 1999, se constató que de los 15 conflictos, 10 fueron iniciados por la denuncia de vecinos que se sintieron afectados y 4 por vecinos previamente organizados en organizaciones locales.³⁹ En 2000 el país presenció la vitalidad adquirida por

³⁴ Sofía Montenegro, Ana Leticia Aguilar, Blanca Dole, Morena Herrera, Lorena Camacho y Lorena Flores, "Características del movimiento de mujeres en Centroamérica", en Ivonne Siu Bermúdez, Wim Dierckxsens y Laura Guzmán compiladoras, *op. cit.*, p.546. Lorena Camacho y Lorena Flores, "Un movimiento de mujeres en desarrollo", en Sofía Montenegro compiladora, *Movimiento de mujeres en Centroamérica* Managua, Programa Regional La Corriente, 1997, pp. 449-491.

³⁵ Sindy Mora, *op.cit.*, 2003.

³⁶ Jacobo Schifter Sikora *La formación de una contracultura. Homosexualismo y Sida en Costa Rica* San José, Ediciones Guayacán, 1989; Jacobo Schifter *Caperucita Roja y el lobo feroz. Sexo público latino* San José, Editorial ILPES, 1999

³⁷ El Primer Congreso Nacional sobre Conservación de Recursos tuvo lugar en abril de 1974. Luke Hilje, "El movimiento conservacionista. ¿Nuevas rutas o viejas pautas?", *Aportes*, N° 51, dic.1988, pp. 51-52.

³⁸ Wilberth Jiménez "Cerros del Sur Oeste de San José. Mueren pulmones verdes del Valle Central", *Idem*, N°39, nov. 1987, pp. 16-17.

³⁹ Jeannette María Arauz Muñoz "Minería y conflicto ambiental: el caso del área de conservación Cordillera Volcánica Central, Costa Rica" Tesis de Maestría, Universidad de Costa Rica, 2003, p. 187.

organizaciones locales en la lucha por la preservación de los recursos naturales en la Zona Sur y en Guápiles y, muy particularmente, en las movilizaciones sociales en contra del Combo. En 2002 grupos ecologistas regionales junto con grupos eclesiales, ciudadanos, municipalidades de Guácimo y Pococí se unen en pro de la conservación de mantos acuíferos y de zona protectora en el cantón de Jiménez, Pococí y en oposición a proyecto hidroeléctrico en el Cantón de Jiménez. El dinamismo del movimiento ecologista contemporáneo deviene de la vitalidad de las organizaciones constituidas para defender el creciente deterioro del medio ambiente así como de las respuestas defensivas de las comunidades afectadas en sus recursos naturales por empresas de muy diversa índole.

Los taxistas constituyen nuevos actores en los movimientos sociales. En el 2004 protagonizaron un número alto de movilizaciones en respuesta al acuerdo MOPT-ARESEP que da a la policía de tránsito la potestad de multar a los porteadores y taxistas ilegales. En ese mismo año se constituyó el Frente de Taxistas del Movimiento Cívico Nacional dentro de la alianza gestada en agosto 2004 contra el monopolio de Riteve.⁴⁰ A partir de 2005 el Movimiento Cívico Nacional se orienta hacia la creación de un frente de oposición al TLC.

Los transportistas y taxistas, jóvenes actores en los movimientos sociales, han mostrado, como lo veremos adelante, habilidad política para establecer alianzas multisectoriales. Sin embargo, en relación con los taxistas existen profundas diferencias en el interior del gremio. Los conflictos entre taxistas formales, informales y porteadores son recurrentes en la actualidad.⁴¹ En el 2006 Esteban Sánchez ubica tres ciclos de movilizaciones colectivas, de éstos, el tercero en importancia, se desata a raíz de la solicitud de los taxistas a la Asamblea Legislativa para que los porteadores sean ilegalizados.⁴²

Los nuevos movimientos sociales, algunos de los cuales datan de finales de los setentas, tienen una participación destacada en los últimos años como actores centrales de acciones colectivas sectoriales pero también como aliados en luchas multisectoriales. La diversidad de reivindicaciones sociales que salen a la luz en las últimas décadas del siglo XX multiplican la creación de organizaciones con demandas específicas. Sin embargo, las grandes movilizaciones contemporáneas en defensa de la institucionalidad creada en el período del estado de bienestar, han generado potentes discursos movilizadores de una pluralidad de organizaciones sociales. Está por verse si estas alianzas coyunturales en un futuro próximo podrán generar vínculos permanentes entre estos diversos actores sociales.

Las alianzas

Las alianzas entre organizaciones sociales cuentan con una tradición poco explorada en el país. No obstante, sabemos que los cuadros sindicales nutrieron

⁴⁰ Sindy Mora, op.cit., 2004.

⁴¹ Sindy Mora, op.cit., 2005.

⁴² “Las acciones colectivas en el año 2006” Ponencia Estado de la Nación.

organizaciones de otra índole como las comunales y las organizaciones cooperativas.⁴³ Por otra parte, en movilizaciones de ciudadanos de carácter regional y, especialmente nacional, cuyas demandas lejos de ser gremiales correspondían a un conjunto diverso de actores sociales, los sindicatos, además de ofrecer a la movilización la experiencia de sus líderes, se sumaron manteniendo su identidad gremial. Por ejemplo, las luchas josefinas de los cincuenta que combinaban la calidad y el precio de la electricidad con la demanda de nacionalización de las líneas de distribución, aun en manos de un monopolio extranjero, contaron con la participación de una heterogeneidad de actores sociales que actuaron en conjunto con organizaciones sindicales. La dirigencia de izquierda intentaba vincular demandas que competían a la ciudadanía en general con demandas específicas de gremios de trabajadores. Las Juntas Progresistas, se propusieron atraer a sindicatos, colegiales, estudiantes universitarios y a los integrantes de las Cámaras de Comercio y de Agricultura para crear un frente nacional en torno a las luchas relacionadas con la electricidad.⁴⁴ La rebelión ciudadana del 83 en contra del aumento de las tarifas eléctricas, contó con la activa participación sindical así como con la integración de algunos de sus líderes en la dirigencia comunal.⁴⁵ En suma, las movilizaciones de mayor envergadura del estado de bienestar contaron con la coalición de las agrupaciones más activas de entonces: aquellas compuestas por vecinos y por sindicatos.

La dispersión de las organizaciones y movilizaciones sociales, en general, se ha considerado característica de esta época.⁴⁶ Sin embargo, con el Combo se afirma una experiencia de colaboración entre una extensa pluralidad de organizaciones sociales. En la década de los noventa hay preocupación por parte de las nuevas organizaciones sociales por construir alianzas entre ellas a través de plataformas reivindicativas comunes.⁴⁷ La lucha de 2000, constituyó una experiencia novedosa de construcción de dichas alianzas. En esa coyuntura los dirigentes sindicales del ICE y de otras organizaciones buscan cómo articular sus acciones con otros sectores organizados: ecologistas, trabajadores del Estado y el Partido Fuerza Democrática. Sin embargo, el movimiento rebasó con creces el trabajo político realizado. Diversas organizaciones sociales se sumaron espontáneamente. Se integraron al movimiento grupos ecologistas, feministas, representantes de la comunidad de Pérez Zeledón, la Diócesis de San Isidro de El General, el Comité de Defensa de la Institucionalidad, el Grupo

⁴³ Sobre participación de dirigentes sindicales en diversas organizaciones sociales puede consultarse: Daniel Camacho, Oto Calvo, Hugo Roldán y Cecilia Arguedas “Dominación ideológica y luchas populares en Costa Rica” en *Revista de Ciencias Sociales*, marzo-octubre, 1978, Nos. 15-16, p185.

⁴⁴ Alvarenga, op.cit., capítulo 3.

⁴⁵ Idem., capítulo 5.

⁴⁶ Según Luis Chavarría, Secretario General de la Unión de Empleados de la Caja, “las organizaciones sociales nuestras -en su mayoría- se han debilitado y existe una dispersión muy grande que ha dificultado la organización de base” “Nuestras organizaciones sociales están debilitadas”, *Aportes*, N°118, enero 1998, pp. 18-19.

⁴⁷ Según Jaime Bustamante “la lucha por un ambiente local sano y por un hábitat alternativo, no está separada de la lucha contra la violencia que quita la vida a través de la injusticia y la opresión, del derecho al desarrollo, del derecho a la vida, del derecho a que la población escoja las mejores opciones de desarrollo humano posibles.” “Cultura política y nuevos sujetos en el espacio local”, *Aportes*, N° 105, mayo-junio 1994, pp.21-22. El grupo ecológico GENE de la Universidad Nacional fundado en 1994 realiza talleres internos sobre “ecología, género, teología de la liberación, etc.” Mynor Mora Alvarado, “La identidad ecológica de los miembros de grupos juveniles abocados a la protección del ambiente en Costa Rica”, Tesis de licenciatura en Sociología, Universidad Nacional, 1996, p. 86.

Soberanía y otros sectores organizados. La Pastoral Social de la Iglesia Católica en algunas de las diócesis del país posibilitó la movilización de sectores sociales sobre los que el sindicalismo ordinariamente no tiene incidencia alguna.⁴⁸ En esta movilización nacional tuvo un papel sobresaliente UPANACIONAL. Sus integrantes iniciaron la gran movilización cívica el 16 de marzo con el bloqueo de Ochoyugo.

Como ha ocurrido históricamente en las grandes explosiones sociales de Costa Rica, dirigentes y analistas han creído ver en estas, coyunturas de profundas transformaciones en el movimiento social, mediante la consolidación de una ciudadanía permanentemente activa frente al Estado. Sin embargo, una vez que el movimiento llega a su punto culminante, este se disuelve y la sociedad parece regresar a su cauce anterior.⁴⁹ En el Informe Estado de la Nación del año 2000 se afirma lo siguiente: “la movilización de fuerzas sociales se desvaneció tan rápidamente como surgió.”⁵⁰ Sin embargo, una visión de mediano plazo nos permite advertir transformaciones sustantivas que no necesariamente se manifiesta en una precisa línea ascendente. El Combo representa un parteaguas en los movimientos sociales en Costa Rica no solo por la importante presencia de las organizaciones sociales que surgen en el ocaso del siglo XX sino también porque visibiliza cambios sustantivos en la cultura política de los participantes.

El problema de la legitimidad de los sectores gobernantes es crucial. Una parte importante de la ciudadanía ya no se siente representada por los partidos mayoritarios. El descrédito de los políticos ha llegado a tal punto que a los integrantes de los dos partidos mayoritarios se les identifica con el adjetivo de “corruptos”. Desde mediados de la década del noventa, cuando se selló el pacto Calderón-Figueroa la ciudadanía ha percibido la conformación de una clase política que ha dejado de lado las diferencias ideológicas para unirse en pro de gobernar en su propio beneficio. En las movilizaciones características de la segunda mitad del siglo XX, la sospecha de corrupción en los entes públicos se constituía en dinamizador de la protesta. Durante las protestas ciudadanas contra las alzas en las tarifas de servicios, siempre aparece la sospecha de que agentes políticos usan el poder del Estado para estafar a la ciudadanía. En la movilización de 2000, en cambio, los participantes levantan listas de políticos que utilizan su cargo para beneficio personal y advierten sobre los supuestos negocios que estos planean desarrollar a partir de la privatización encubierta del ICE. Esta movilización se da en un contexto de aguda crisis de legitimidad de los partidos, de los dirigentes políticos y de la Asamblea, quienes son acusados de gobernar en su propio beneficio.

Ello no significa que con anterioridad la ciudadanía tuviera una imagen necesariamente positiva de los políticos. Sabían que el clientelismo era parte medular del accionar de la política y actuaron en complicidad con sus líderes. Sin embargo, la

⁴⁸ Varios autores *Estado de la Nación en Desarrollo humano sostenible* op.cit., p. 214.

⁴⁹ “... a partir de marzo no surgieron preguntas ni acciones que apuntaran hacia otras formas de interpretación de la ciudadanía y la democracia.” Manuel Solís “Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la privatización de la energía y las telecomunicaciones en Costa Rica”, *Revista de Ciencias Sociales*, N° 95, 2002 (1) p. 34.

⁵⁰ op.ci., 220.

marginalización de un sector importante de las clases pobres y medias de las dádivas del Estado, contribuyó a deteriorar la imagen de los políticos en la precisa coyuntura en la que estos dejaron de lado principios básicos de sus partidos para construir entre sí alianzas que despertaban profundas sospechas entre los ciudadanos. La creciente desconfianza hacia los políticos en un contexto de escándalos de corrupción que involucran no solo a altos directivos de instituciones públicas sino también a expresidentes, ha acrecentado en la ciudadanía la preocupación por las deficiencias en la fiscalización y rendición de cuentas.⁵¹ El proyecto de los políticos ubicados en los partidos tradicionales de profundizar las reformas neoliberales en el contexto de una profunda pérdida de legitimidad, ha creado un ambiente propicio para la formación de movilizaciones multisectoriales.

Situados a 7 años de distancia del Combo podemos advertir que, a partir de entonces, se han venido cristalizando nuevas fuerzas sociales. Quienes con entusiasmo presenciaron la amplia coalición de organizaciones sociales que participó en la movilización, no dejaron de expresar su decepción cuando el mundo parecía volver a su cauce normal. Sin embargo, la experiencia del Combo ha potenciado la creación de alianzas entre un extenso abanico de organizaciones sociales. De 2000 a 2004 se evidencia un despunte creciente de dichas alianzas. Entre 2000 y 2003 se registra un total de 16.3% y 31.4% respectivamente de movilizaciones en las que las organizaciones participan en acciones mancomunadas.⁵² En 2004 las acciones colectivas mediante alianzas alcanzan el 39.6% del total de las registradas.⁵³ Pese a que en el 2005 hay un abrupto descenso, el porcentaje correspondiente continúa superando considerablemente al del año base.⁵⁴ Los movimientos transectoriales se caracterizan, como lo veremos a continuación, por contar con demandas sustantivas y mayor capacidad de éxito parcial o total.

Cuadro 2
Porcentaje de movilizaciones sociales plurisectoriales 2000-2005

Años	Porcentaje
2000	16.3
2003	31.4
2004	39.6
2005	29.6

Fuente: Ponencias PEN. Acciones Colectivas 2001-2006.

Las iniciativas conjuntas como lo señalan previas ponencias, se proponen obtener mayor capacidad de influencia en la toma de decisiones del Estado, superando

⁵¹ Al respecto puede consultarse: Vilma Pernudi Chavarría “Poder Legislativo, ciudadanía y democracia” en *Aportes* Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional, N°2, abril, 2005, pp. 4-10.

⁵² Sindy Mora, op.cit., 2003 Se nos advierte que es necesario tomar en cuenta la incidencia en estos porcentajes de los sesgos presentados en la fuente básica: los periódicos.

⁵³ Sindy Mora, op.cit., 2004.

⁵⁴ Sindy Mora, op.cit., 2005.

el corporativismo En la confluencia de diversas organizaciones se han logrado superar las demandas meramente sectoriales proponiendo reivindicaciones que afectan el sistema socio-político, tales como la ampliación de la democracia económica, política, social, de género y etnia.

En ese sentido las alianzas entre organizaciones ciudadanas: en alguna medida, aunque aun tímidamente, buscan llenar el vacío dejado por los partidos políticos de tradición en Costa Rica.

Llama la atención la presencia recurrente en esta construcción de alianzas de organizaciones que cuentan con una basta experiencia en la participación en las luchas sociales contemporáneas. Por ejemplo en el 2001 UPANACIONAL junto con la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), y comunidades se oponen a aumento de tarifas eléctricas propuesto por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) UPANACIONAL en el contexto de esta alianza plantea sus reivindicaciones sectoriales: readecuación de deudas, creación de un fideicomiso para la protección y el fomento agropecuario para pequeños y medianos agricultores, financiamiento rural para la reactivación económica, obteniendo un triunfo parcial que consiste en la creación del fideicomiso.⁵⁵

En 2002 una extensa movilización que aglutina diversos actores sociales se anota un significativo triunfo. La Asociación de lucha antipetrolera (ADELA) la Federación de Organizaciones Ambientalistas (FECON) organizaciones regionales de Limón (empresariales, eclesiales) se unen en contra de las perforaciones petroleras autorizadas por el gobierno a la empresa Harken CR Holding SA. Esta movilización social culmina con el Dictamen de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) ratificado por el Ministerio del Ambiente declarando la inviabilidad ambiental del proyecto Harken CR Holdings SA.

También en 2002 una extensa movilización ciudadana compuesta por la FEUCR, el Colegio de Periodistas, la Asociación de Prensa Extranjera, organizaciones de mujeres y organizaciones sindicales: se constituyó para repudiar el asesinato de Parmenio Medina y demandar justicia.⁵⁶

En ese mismo año se unen 15 organizaciones del sector agropecuario nacional nucleadas en Foro nacional agropecuario: CORFOGA, FROPORCA, Mesa Nacional Indígena, UPIAV, Consejo Campesino, Movimiento de Mujeres Campesinas, ADAINTEC, Frente de Lucha del Caribe CANAPALMA, Cámara Nacional de Plataneros, Foro Nicoyano, FOSUR, Agenda XXI, CONACOOOP. Estas organizaciones intentan llevar adelante una agenda de reactivación de economía y desarrollo rural que contemple una estrategia de participación en el proceso de apertura comercial, así como reformas financieras para el acceso a recursos y capacitación gerencial y

⁵⁵ Hannia Franceschi “Acciones colectivas de la sociedad civil hacia el fortalecimiento de la democracia en Costa Rica” Ponencia Estado de la Nación, 2001.

⁵⁶ Hannia Franceschi “Acciones colectivas de la sociedad civil hacia el fortalecimiento de la democracia en Costa Rica. 2002” Ponencia Estado de la Nación, 2002.

productiva, instancias de participación de las organizaciones de la sociedad civil en planificación y control político, manejo integral de recursos naturales y seguridad alimentaria para fortalecer la producción nacional.⁵⁷ Esta agenda se empieza a elaborar en 2002 y se presenta en 2003. Con esta gran coalición de organizaciones, el movimiento social intenta ofrecer propuestas sustantivas que permitan incidir en decisiones cruciales para definir el rumbo del país.

De mayo a julio de 2004 asistimos a una de las movilizaciones más importantes de los últimos años, en la que agricultores, taxistas, dueños de talleres, comunidades, trabajadores del sector público, estudiantes de secundaria y universitarios se unieron para luchar contra el monopolio de la revisión técnica vehicular concedido a RITEVE. El Movimiento Cívico Nacional logra integrar al lado de la demanda fundamental, otras atinentes a aliados reales y potenciales. Además de pronunciarse por la apertura del monopolio de revisión técnica, demandaron un aumento salarial para el sector público y manifestaron su oposición al TLC.⁵⁸

He aquí donde empieza a cristalizar la acción colectiva más significativa de los últimos años: el movimiento contra el TLC. Estudiantes universitarios, trabajadores públicos, pequeños y medianos empresarios, agricultores, organizaciones feministas y étnicas, entre otros, han venido desarrollando estrategias de lucha contra el TLC desde el 2004 pero las demostraciones de oposición se han intensificado considerablemente en los dos últimos años.⁵⁹ La lucha contra el TLC ha sido excepcional en cuanto a su duración, pues las acciones colectivas en general tienden a concentrarse en días y, a lo sumo, en semanas. En este caso la ciudadanía opuesta al proyecto, en los últimos tres años, se ha preocupado por profundizar el proceso de organización y mantener su visibilidad en el espacio público frente a un gobierno que ha tenido como proyecto fundamental la aprobación de dicho acuerdo con los Estados Unidos.

En síntesis, las organizaciones sociales han venido mostrando en los últimos años que cuentan con la capacidad de constituir alianzas estratégicas con el fin de enfrentar a los poderes públicos cuando estos se proponen llevar adelante propuestas que amplios sectores consideran desfavorables a sus intereses gremiales en particular y a la sociedad costarricense en general. En los primeros siete años de 2000, la lucha contra el denominado Combo, el movimiento en oposición al monopolio de Riteve y la movilización “No al TLC” han tenido consecuencias importantes en el país. La primera obligó al gobierno de turno a echar marcha atrás, la segunda, aunque no logró su cometido, obtuvo algunas concesiones y, lo más importante, politizó a importantes sectores vinculados al transporte de carga y de personas y, la tercera, si bien aun mantiene el pulso con el gobierno, ha impedido por años que el TLC se apruebe en

⁵⁷ Idem.

⁵⁸ Sindy Mora, op.cit., 2004.

⁵⁹ En 2006, 42 de las 312 acciones colectivas registradas se llevaron a cabo para manifestar la oposición al TLC. La marcha del 26 de febrero de 2007 mostró la capacidad de movilización de las organizaciones sociales frente a los retos del TLC. Ver: Esteban Sánchez “Las acciones colectivas en Costa Rica en el año 2006” Ponencia Estado de la Nación.

Costa Rica, generando una experiencia inédita en las luchas contra la globalización en América Latina.

Dirección de demandas en acciones colectivas gremiales y vecinales

Según el análisis estadístico realizado por Sindy Mora que comprende los años 2000-2003, dos de las más importantes demandas de la segunda mitad del siglo XX siguen conservando protagonismo en las movilizaciones sociales. Se trata de las que abogan por mejoras en las remuneraciones laborales (19.5%) así como por la calidad y costos de servicios (11,6%)⁶⁰ Estos datos reflejan la importancia que conservan movilizaciones con reivindicaciones precisas, caracterizadas por su carácter defensivo, más que propositivo. Se trata de movilizaciones coyunturales en demanda de la intervención del Estado o las municipalidades frente a problemas relativos a servicios. Pero, mientras en el pasado, las movilizaciones vecinales giraban predominantemente alrededor del problemas relacionados con la calidad y precio de los servicios del agua, la electricidad y el transporte público, en la actualidad frente al deterioro de la infraestructura vial, las protestas por el estado de las vías públicas y vecinales, adquieren centralidad. Así mismo, como lo analizamos páginas atrás, los crecientes retos que enfrentan las comunidades frente a empresas cuyas actividades generan daños al medio ambiente, han contribuido a la organización y movilización vecinal.

UPANACIONAL es una organización social que durante las últimas décadas ha mantenido consistentemente demandas en torno a la apertura comercial en el agro y, aunque parcialmente, ha obtenido algunos éxitos. En el contexto de los bloqueos en contra del proyecto denominado COMBO, logra que el gobierno se comprometa a gestionar ayudas crediticias, controlar eventuales subfacturaciones en las importaciones de papa y cebolla y analizar la posibilidad de elevar los aranceles a esos productos.⁶¹ Ese mismo año mediante protestas realizadas el 27 de julio en Parrita, Cañas, Atenas San Ramón, Zarcero, Cartago, Bajo los Rodríguez (zona Norte) y San Miguel de Sarapiquí, el gobierno respondió proponiendo la cancelación de deudas bancarias de los agricultores.

Conforme los servicios públicos se fueron concentrando en entes centralizados durante el período del estado de bienestar, también se fue trasladando el foco de la conflictividad comunal desde las municipalidades hacia instituciones nacionales. Las luchas en torno al servicio del agua constituyen un buen ejemplo de este proceso. Hasta que el AyA empezó a monopolizar los acueductos del país, las constantes explosiones vecinales por la carencia del agua se dirigieron a las municipalidades, pues estas estaban a cargo del servicio. El rápido proceso de centralización de los acueductos, dirigió la protesta social hacia el AyA, institución que fue identificada con el gobierno central de turno. Si bien en los años sesentas ese proceso no fue bien visto por las organizaciones comunales, que consideraron más conveniente continuar

⁶⁰ Sindy Mora, op.cit., 2003. Esta tendencia se mantiene en el 2004 y en el 2005. Ver: Sindy Mora, op.cit., 2004 y 2005.

⁶¹ Varios autores *Estado de la Nación...* op.cit., p. 221.

negociando con las municipalidades que con poderosos y distantes entes nacionales,⁶² en la actualidad, cuando las altas autoridades promueven reintegrar cuotas del poder cedido frente al Estado a las municipalidades, la ciudadanía responde con escepticismo, los magros resultados de esta nueva experiencia se evidenciaron en las recientes elecciones municipales, en las que el abstencionismo adquirió cifras realmente bochornosas. En 2006 de las 312 demandas registradas, apenas 24 se dirigieron a las municipalidades⁶³ lo que muestra que la ciudadanía tiene fuertes dudas acerca de las capacidades de los gobiernos locales.

Sin embargo, en los últimos años se ha querido que las municipalidades resurjan como entes con protagonismo, pero con una capacidad muy limitada para hacer frente a los retos contemporáneos. Por ello se convierten en focos de conflicto. De acuerdo al Informe del Estado de la Nación del 2000, el traslado de competencias a las municipalidades ha aumentado la posibilidad de divergencias originadas en decisiones trascendentes para los ciudadanos tales como las relacionadas con el monto de los impuestos o las tasas, así como con el tipo y calidad de los servicios que prestan. Se evidencia un incremento importante de los conflictos en los municipios. Ante la Sala Constitucional por ejemplo, según dicho informe, se presentaron 699 recursos de amparo contra 73 municipalidades de todo el país.

Por otra parte, las instituciones descentralizadas, el gobierno central y los ministerios continúan acaparando el grueso de las demandas.⁶⁴ Como ha sido característico de la segunda mitad del siglo XX, los actores sociales que protestan solicitan, fundamentalmente, la intervención del gobierno. Las instituciones centrales de poder mantienen su legitimidad construida durante el siglo XX pero particularmente durante la expansión del estado de bienestar, como los interlocutores legítimos de la ciudadanía. Por ejemplo en 2003 las demandas dirigidas al gobierno en general corresponden al 37.6%, aquellas dirigidas al presidente constituyen el 5.5%, a los ministerios el 27.3%, a las instituciones descentralizadas el 11.3% y a la Asamblea Legislativa el 8.3%. Las demandas contra empresas privadas alcanzan apenas el 3.6%⁶⁵

En síntesis, las demandas sectoriales, al igual que en la segunda mitad del siglo XX, continúan girando alrededor de reivindicaciones inmediatas tales como, en el caso de los trabajadores, condiciones salariales, y en relación con los vecinos, servicios públicos y problemas vinculados con perjuicios causados al medio ambiente. Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años por fortalecer a los poderes locales, las instituciones del gobierno central continúan siendo las legítimas negociadoras

Cuadro 3

Reivindicaciones de las acciones colectivas sectoriales y multisectoriales

⁶² Alvarenga, op.cit., capítulos 1 y 3.

⁶³ Esteban Sánchez, op.cit.

⁶⁴ Varios autores *Estado de la Nación...* op.cit; Franceschi, op.cit., 2001 y op.cit., 2002.

⁶⁵ Sindy Mora, op.cit., 2003.

Acciones colectivas sectoriales (trabajadores y vecinos)	Predominan demandas concretas relacionadas con salarios, condiciones laborales y problemas relativos a la comunidad
Acciones colectivas multisectoriales	Predominan demandas trascendentes para amplios sectores sociales.

Respuesta a las movilizaciones sociales

Según estudios realizados por el proyecto Estado de la Nación durante la presente década, es característico de las instituciones estatales utilizar el mecanismo del arreglo inmediato y el arreglo tras negociación, aun cuando los datos no permiten apreciar las respuestas concretas dadas, en otros casos, la información con que se cuenta, sugiere que es frecuente la ausencia de respuesta por parte de los entes estatales. Por otra parte, sindicatos magisteriales, productores agrícolas, indígenas y cámaras empresariales se quejan de que aun cuando el gobierno ha negociado con ellos, recurrentemente incumple los compromisos asumidos.

Por otro lado, los constructores del Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX han concebido la dinámica electoral como el momento de apertura de participación ciudadana. Los últimos seis decenios se han caracterizado por la escasa posibilidad de incidencia en el accionar de las instituciones públicas por parte de la ciudadanía. Las acciones colectivas en alguna medida responden a esa rigidez del sistema frente al mundo social y también expresan un pacto tácito entre ciudadanos y entes estatales en el que los primeros, aun en las etapas más represivas de la historia de América Latina, se han lanzado a ocupar los espacios públicos con la seguridad de que la represión, de aplicarse, se haría discretamente. Pese a que el Estado con frecuencia no ofrece respuestas, las acciones colectivas constatan la alta legitimidad del sistema costarricense⁶⁶. En éste la solución de los conflictos se realiza mediante acciones colectivas legales y civilistas. Desde la cruenta represión de 1962 en Cartago, desaparecieron los típicos “bastonazos” a que eran sometidos los manifestantes en los años cuarentas. Sin embargo, después del 2000 los agentes estatales han estado menos dispuestos a actuar tolerantemente frente a las tomas del espacio público, en particular los bloqueos de carreteras. En las movilizaciones contra RITEVE se ensayaron detenciones masivas y enjuiciamiento de bloqueadores. Esta creciente intolerancia frente a las movilizaciones sociales se produce cuando el movimiento social amenaza con interferir recurrentemente ya no solo en políticas públicas concretas, sino en proyectos trascendentes para el futuro de la nación costarricense.

En la historia contemporánea de Costa Rica, desde la década de 1950 hasta esta parte, las acciones colectivas se suceden recurrentemente y, aunque la respuesta del Estado no se evidencia automáticamente, después de cada movilización, en el largo plazo puede apreciarse que algunas de las preocupaciones centrales de la ciudadanía

⁶⁶ Véase por ejemplo Esteban Sánchez op.cit.

han tenido resonancia en las políticas públicas. La recepción por parte de los entes estatales de demandas fundamentales en el siglo XX, como el buen servicio a bajo costo del agua y de la electricidad, no puede apreciarse en el resultado de cada una de las movilizaciones comunales o incluso regionales, pero en el largo plazo se evidencia que estas han incidido en las condiciones excepcionales en el concierto centroamericano con que cuenta el país en relación con dichos servicios.

Las recurrentes movilizaciones de los trabajadores públicos en demanda de mejores condiciones laborales no han sido necesariamente exitosas en términos individuales, pero no es casual que Costa Rica siga contando con condiciones laborales mucho más favorables que el resto de la región centroamericana pese a los esfuerzos de agentes políticos por “liberalizar” y “flexibilizar” la relación del Estado con profesionales, técnicos y trabajadores no especializados cuyos salarios devienen de fondos públicos.

Formas de protesta:

La toma simbólica del espacio público ha caracterizado la protesta social costarricense de la segunda mitad del siglo XX y, en los primeros años del XXI, se ha afianzado como la expresión más característica de la protesta social. Las luchas contra el Combo son recurrentemente representadas con fotografías de las principales manifestaciones que muestran inmensas masas humanas tomándose las principales avenidas de San José. Las fotografías que dan cuenta de la manifestación del 26 de febrero del 2007, ya se han convertido en símbolo de las luchas contemporáneas contra el TLC.

Las manifestaciones callejeras han caracterizado tanto las luchas gremiales como las luchas ciudadanas en relación con los servicios públicos. Las marchas vecinales, regionales o nacionales que culminan con los discursos de los dirigentes, son típicas de la Costa Rica del estado de bienestar.

No es hasta finales de los setenta cuando los ciudadanos descubren un efectivo medio de presión en la toma indefinida de las calles. Los bloqueos de las vías de comunicación de la mayor parte del país por un solo día: el 8 de junio de 1983, bastaron para que el gobierno de Luis Alberto Monge accediera ante las protestas por los aumentos en las tarifas eléctricas. Para entonces se denominó a los bloqueos, barricadas, palabra cargada de un fuerte contenido subversivo en correspondencia con las luchas armadas que radicalizaron las sociedades centroamericanas.

Durante las luchas contra el Combo el país presenció una fuerte ola de bloqueos: 103 en total. En general, estos están relacionados con ciclos de acción colectiva, es decir, con los momentos de intensificación de la protesta social.”⁶⁷ En 2000, el bloqueo de Ochoyugo por parte de UPANACIONAL dio inicio al ciclo de protesta más

⁶⁷ Sindy Mora, op.cit., 2005.

intenso. No obstante, también este mecanismo de protesta ha sido utilizado recurrentemente en luchas corporativas.

Si bien la policía en 1983, pese al clima de radicalización política, no actuó en contra de los bloqueadores,⁶⁸ en 2000, en cambio, se presenciaron enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, así como detenciones de quienes se tomaron con su cuerpo la vía pública.

En los últimos años los vecinos, ante la poca efectividad del diálogo con las instancias gubernamentales, recurren al bloqueo de las vías locales con el fin de presionar a los funcionarios correspondientes para lograr una pronta solución.. En 2005 los periódicos registran 22 bloqueos llevados a cabo por vecinos.⁶⁹

Las ponencias sobre el Estado de la Nación relacionadas con el tema de las Acciones Colectivas muestran el predominio del carácter legal y civilista de las movilizaciones sociales. Entre 2000 y 2003 la utilización de actos contra la propiedad apenas ascienden al 0.55% y la invasión de la propiedad al 0.71% de las acciones colectivas. La declaración pública que refiere a conferencias de prensa, boletines, manifiestos, sobresale como tipo de acción predominante entre 2000 y 2005. Por ejemplo, en 2004 los tipos de acciones se distribuyen de la siguiente forma: bloqueo:18.52%. declaración pública, 42.28%, amenaza, 4.66% huelgao 1.7%, paro 5.86%, concentraciones: 4.17 y marchas, 7.72%. Como se analizó páginas atrás, las respuestas del gobierno a las solicitudes planteadas por los ciudadanos son bastante escasas. Por ello, la toma de calles se ha mantenido históricamente como mecanismo fundamental de presión.

Protestas de alcance nacional combinan tanto la declaración pública como las tomas de calle. En las luchas contra el Combo, además de la participación de cuatro estudiantes universitarios en una huelga de hambre, se realizaron tradicionales manifestaciones públicas fuertes denuncias contra autoridades y múltiples foros y discusiones en la televisión.

La disminución en 2001 de los bloqueos de vías públicas fue interpretada por la analista del Estado de la Nación, Hannia Franceschi como efecto de la creciente represión ensayada por las autoridades públicas frente a esta forma de presión social. Una nueva legislación : la introducción del artículo 256bis en el Código Penal, establece penas de 10 a 30 días de prisión a quienes obstaculicen el tránsito. Sin embargo, en 2003 y especialmente en 2004, en el contexto de las luchas contra el monopolio de la revisión técnica, el bloqueo de vías vuelve a ocupar un lugar preminente pese a que, efectivamente se aplican las nuevas sanciones establecidas en el Código Penal. Aun cuando los 97 bloqueos llevados a cabo en la lucha contra el monopolio de RITEVE se levantaron el mismo día, estos dejaron como saldo 78 personas arrestadas.⁷⁰ En este contexto se ensaya una nueva forma de acción que aun no está tipificada como delito:

⁶⁸ Alvarenga, op.cit., capítulo 5.

⁶⁹ Sindy Mora, op.cit., 2005.

⁷⁰ Idem.

el tortuguismo que, en este caso, consiste en la marcha de furgones que se desplazan lentamente.

En 2005 también los trabajadores de los muelles de Limón ensayan 14 acciones de tortuguismo que consiste en desarrollar las labores con la mayor lentitud posible con el fin de protestar contra la supresión de las convenciones colectivas así como contra los procesos de privatización de los muelles.

En general se combinan distintas estrategias de lucha. Es difícil de concebir que los actores sociales recurran al bloqueo sin haber ensayado previamente mecanismos negociadores con las autoridades públicas. En coyunturas de aguda confrontación como la vivida por el país en 2000, se abren espacios para desplegar diversas formas de protesta. Por ejemplo los estibadores de Caldera y de Limón se unieron a la movilización en contra del Combo mediante paros, bloqueos, manifestaciones, así como la paralización del puerto de Caldera.⁷¹

Conclusiones

En esta ponencia intentamos mostrar las rupturas y continuidades de la protesta social en el tránsito de la Costa Rica del estado de bienestar a la contemporánea. En ambos momentos históricos encontramos que la protesta es una vía que la ciudadanía ensaya para hacer escuchar sus reivindicaciones frente a los poderes públicos. En nuestra sociedad, tradicionalmente han existido movimientos reivindicativos que han impulsado a significativos contingentes humanos a tomarse las vías públicas para hacer manifiesto su descontento. En la primera mitad de la década del ochenta, los agentes del Estado llevan a cabo transformaciones estructurales para asentar el neoliberalismo en el contexto de una profunda crisis económica y de una región centroamericana envuelta en cruentas guerras. Costa Rica se convierte en espacio estratégico para la intervención de Estados Unidos en la Nicaragua sandinista. Entonces el país vivió una importante época de reivindicaciones ciudadanas y sindicales en protesta por el deterioro significativo de las condiciones de vida y en demanda de que el gobierno asumiera una política de neutralidad frente a los conflictos centroamericanos.⁷² Quizá con la notable excepción de los primeros años de la década de los ochentas, en los últimos años, las movilizaciones masivas se han sucedido con una recurrencia inédita en la historia contemporánea del país. Actores sociales que se habían caracterizado por su apego al orden, tales como los transportistas y taxistas, irrumpen como protagonistas en amplias movilizaciones. Los productores agrícolas, valiéndose de su experiencia de varias décadas en las luchas reivindicativas, han aprovechado el descontento ciudadano ante los proyectos estatales que afectan sus intereses para constituir alianzas que potencien su capacidad de resistencia. La dudosa capacidad que los estudiosos de las sociedades contemporáneas han atribuido a los movimientos sociales que irrumpen en los setentas

⁷¹ Gregorio Bolaños *Trabajo, cultura e identidad. 1940-2003. Trabajadores portuarios. Caldera-Puntarenas* San José: Imprenta Nacional, 2004, p.105.

⁷² Al respecto puede consultarse Carlos Figueroa Ibarra “Centroamérica entre la crisis y la esperanza (1978-1990)” en Edelberto Torres Rivas editor *Historia General de Centroamérica* Tomo VI, San José: Flacso, 1994, pp. 61-67.

y ochentas para establecer vínculos que permitan hacer propuestas reivindicativas que competen a la nación y ya no solo a sectores específicos, pareciera que debe de revisarse a partir de los acontecimientos contemporáneos en nuestro país.⁷³

¿Qué transformaciones han ocurrido en el tránsito de las últimas décadas del siglo XX al siglo XXI que han potenciado la toma masiva de las calles como recurso de protesta? Las demandas prevalecientes en el período del estado de bienestar estuvieron vinculadas con los proyectos redistributivos y de modernización de la sociedad. En general las reivindicaciones tenían puntos de coincidencia con el discurso oficial. Si bien el proceso de expansión del Estado a través del control de los servicios públicos alentó las protestas ciudadanas, las reivindicaciones sectoriales por tierra, trabajo, mejores salarios y posibilidades de ascenso social, encontraron puntos de enlace con políticas gubernamentales en las que progreso y bienestar estaban en directa correlación. En lo que va del siglo XXI las protestas que han convocado a significativos sectores de la ciudadanía, están vinculadas con proyectos estatales que los rebeldes ciudadanos temen que podrían transformar cualitativamente las políticas socio-económicas del país. Ello ocurre precisamente cuando se vive un profundo proceso de deterioro de la legitimidad de la llamada “clase política”, proceso que ya está en marcha a mediados de los noventa, cuando ocurre el llamado “Pacto Calderón-Figueroa”, se acentúa en las luchas contra el Combo de 2000 y en los últimos años, con los escándalos de corrupción que involucran a expresidentes y altos funcionarios. El deterioro de la legitimidad de los políticos ha coincidido con el creciente descontento de la ciudadanía frente a los agentes del Estado y, en particular, ha alimentado las sospechas de que los proyectos contemporáneos de envergadura nacional, están destinados a beneficiar minorías privilegiadas.

En la década de los ochentas el surgimiento de los nuevos movimientos sociales no coincidió con un descenso del protagonismo de los sindicatos. Encontramos una continuidad en el período analizado en lo que respecta a la hegemonía sindical en las movilizaciones sociales. Durante el estado de bienestar los sindicatos del sector público apoyaron a los movimientos de amplia participación ciudadana. En la presente década el sindicalismo tiene un papel vital en las movilizaciones de mayor envergadura, las que han logrado cohesionar un amplio espectro de organizaciones sociales. Frente a la vitalidad del movimiento sindical nos encontramos con un movimiento de vecinos que, si bien mantiene una significativa importancia en el conjunto de las acciones colectivas, ha perdido la capacidad que otrora tuvo de generar movilizaciones regionales y nacionales. Al perder sus vínculos con los partidos de izquierda, los vecinos también perdieron la capacidad de establecer alianzas valiéndose de la estructura partidaria y, por tanto, de constituirse en representantes de amplios contingentes ciudadanos.

En el período estudiado prevalece el acuerdo tácito entre ciudadanos y agentes del Estado que tradicionalmente ha permitido a los primeros tomarse los espacios públicos para protestar sin temor a enfrentar represiones masivas. Sin embargo, en los

⁷³ Una importante reflexión sobre las posibilidades de articulación de los movimientos identitarios puede encontrarse en: Ernesto Laclau y Chantal Mouffe *Hegemonía y estrategia socialista* Madrid: Siglo XXI Editores, 1987.

últimos años los gobiernos de turno se han mostrado menos tolerantes con quienes manifiestan su descontento a través de medidas de presión tales como los bloqueos y, junto con los hegemónicos medios de comunicación, han construido un fuerte discurso sancionador presentándolos como enemigos de la paz y el orden. Frente a la tendencia a demonizar a quienes protestan, es importante recordar que la protesta social no ha sido ajena a la democracia costarricense, más bien ha estado profundamente arraigada en ésta constituyéndose en un mecanismo fundamental para dotarla de la flexibilidad requerida para su funcionamiento.